



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Miguel Ángel Rodríguez Lozano
DEMANDADA:	Colpensiones y Protección S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma y adiciona
Radicado	05001-31-05-007-2022-00047-01 (015) 05001310500720220004701

Medellín, a los 16 días de junio de dos mil veintitrés (2023),

AUTO

Conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante el archivo 03Alegatos y Sustitución Colpensiones -02Segunda instancia, se reconoce personería para actuar en representación de Colpensiones a la doctora Valentina Gómez Agudelo con Tarjeta Profesional 156.773 del Consejo Superior de la Judicatura.

En la fecha indicada la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de Colpensiones así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de ésta, en el proceso ordinario laboral adelantado por el señor **Miguel Ángel Rodríguez Lozano** en contra de **Colpensiones** y de **Protección S.A.**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

I. ANTECEDENTES:

1.1 PRETENSIONES.

El señor Miguel Ángel Rodríguez Lozano presentó demanda en contra de Colpensiones y Protección S.A. buscando se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), disponiendo la reactivación automática de su vinculación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM); que se condene a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones todos los aportes, rendimiento y rendimientos financieros, imputar el tiempo en su historia laboral; y las costas del proceso.

1.2 HECHOS.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 1 de enero de 1969; que se afilió al ISS el 29 de julio de 1991; que se trasladó al RAIS administrado por Protección S.A. en julio de 1994; sin embargo, aduce que la entidad no le brindó la debida información acerca de las implicaciones de su traslado.

1.3 CONTESTACIÓN DEMANDADAS.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas allegaron respuesta oportuna, así:

Colpensiones aceptó la fecha de nacimiento y edad del actor, la fecha de afiliación al ISS, pero aclaró que el número de semanas cotizados es de 11.29, la fecha de traslado a Protección y que es el destinatario de los aportes en pensiones, mas no que esté obligado a retornar aportes, la petición elevada ante Protección de solicitud de proyección o simulación pensional y la respuesta emitida, y el agotamiento de la reclamación administrativa; de los demás hechos, dijo que no le constan por ser situaciones ajenas a la entidad, así como que no es cierto que proceda el retorno a dicho ente; se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen, buena fe, prescripción, e imposibilidad de condena en costas.

Protección S.A. tuvo como ciertos el hecho de la edad del actor, las semanas cotizadas y actualiza el total a la fecha de presentación de la demanda, la petición elevada ante dicho ente mas no la elevada a Colpensiones, la solicitud que elevó de proyección o simulación pensional y la respuesta emitida, que no consta de la fecha de las cotizaciones a Colpensiones, ni las situaciones personales con respecto al proceso de traslado; y negó los hechos que hablan de una indebida información. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: Inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, y la de inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 23 de enero de 2023, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA del traslado efectuado por el señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOZANO C.C. 94.305.649, del RPMPD al RAIS administrado por AFP PROTECCIÓN en el año 1994.

SEGUNDO: Se DECLARA que el demandante se encuentra válidamente afiliado al RPMPD administrado por COLPENSIONES sin solución de continuidad.

TERCERO: En consecuencia, se CONDENA a la AFP PROTECCION a trasladar los dineros con destino a COLPENSIONES, los montos existentes en la cuenta de ahorro individual de la demandante y los aportes al FGPM con sus respectivos rendimientos financieros, se exceptúan de dicha devolución los dineros destinados a pago de cuotas de administración y prima de seguros previsionales para los riegos de invalidez y muerte conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Estos dineros deberán ser trasladados dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CUARTO: SE CONDENA a COLPENSIONES a validar la afiliación de la demandante y recibir la devolución de los dineros ordenada en este proveído, además de tener en cuenta el tiempo cotizado por la demandante en el RAIS, como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral.

QUINTO: Las excepciones propuestas por las codemandadas se declaran no probadas, excepto las excepciones de BUENA FE e IMPOSIBILIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS propuesta por COLPENSIONES y la de inexistencia de la obligación de devolver cuotas de administración y la inexistencia de la obligación de devolver prima del seguro previsional propuestas por la AFP PROTECCIÓN, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Se CONDENA en costas a AFP PROTECCION S.A fijando el despacho como agencias en derecho la suma de DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS, MONEDA LEGAL, (\$2.320.000) equivalente a dos SMLMV a favor de la demandante y Se abstiene el despacho de condenar en costas a Colpensiones por las razones indicadas en la parte motiva de esta decisión.

SÉPTIMO: Si el presente fallo no fuere apelado, por haber resultado adverso a los intereses de COLPENSIONES en virtud de lo que dispone el artículo 69 del CPTSS, se remitirá el expediente y la grabación a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Medellín, para que allí se surta el grado jurisdiccional de consulta.

1.5 RECURSO DE APELACIÓN.

Colpensiones interpuso recurso contra el numeral 3 a fin de que se ordene el traslado del 100 % de la cotización realizada por el demandante sin descontar los gastos de administración y cuotas del seguro previsional, ante la inoponibilidad de dicho ente como tercero de buena fe, y que es la AFP quien debe asumir la carga económica del traslado y quien debe hacer conforme al estudio actuarial que determine que se cubre la integridad la prestación en los términos del RPMPD.

II. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Colpensiones reiteró los argumentos expuestos en la sustentación de primera instancia, y manifestó que quedó demostrado que el fondo le suministró al actor la información suficiente para pertenecer por ese régimen, que la disparidad en cifras de la mesada pensional no es causal para declarar la ineficacia; que ya superó la edad para retornar al RPM.

Demandante el apoderado solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia ante la ineficacia de su traslado al RAIS por falta de consentimiento informado, cumpliéndose los elementos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

Conoce la Sala del recurso de apelación y de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala analizará, si se declara la ineficacia del traslado de la demandante Miguel Ángel Rodríguez Lozano, con el consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y, si es así, establecerá sus consecuencias.

3.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrojado, no hay duda de que el demandante nació el 1 de enero de 1969 como se observa en su cédula de ciudadanía (folio 15 archivo 03 Escrito de demanda y anexos), y se afilió al RPM hoy administrado por Colpensiones, el 29 de julio de 1991, como se infiere de la historia laboral registrada expedida por Colpensiones (folios 10 a 18 archivo 09 Respuesta requerimiento Colpensiones); y posteriormente se trasladó al RAIS administrado por Protección S.A. suscribiendo solicitud de vinculación el 13 de septiembre de 1994 (folio 116 archivo 08 Respuesta Colpensiones).

3.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto es recordar que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, sea acreedor a las sanciones del inciso 1° del artículo 271 de la misma ley, de acuerdo con ella, cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo es que, aunque la afiliación es libre y voluntaria, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Ahora, según el artículo 97, numeral 1.o del Decreto 663 de 1993, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar información necesaria y transparente a los afiliados, «de suerte que les permita, mediante elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas».

Por información necesaria, la Sala de Casación Laboral ha afirmado que comprende:

(...)la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones», y respecto a la transparencia, ha explicado que implica la obligación de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios» (CSJ SL1452-2019, reiterada en SL1688-2019 y SL1689-2019).

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado en quien carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a sus circunstancias particulares, de manera que es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, cuando la administradora incumplió la obligación de brindarle la información necesaria, en obediencia a lo establecido en los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993.

Así, cuando el afiliado alega la falta de información o la mala entrega de esta por parte de la AFP, como ocurre en este caso, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, por cuanto: *«la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo»* (artículo 1604 CC).

De tal manera que, al haberse indicado por el actor que *«no recibió la información»*, por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario,

es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Así, se reitera que la carga de la prueba, sin importar la circunstancia particular del afiliado, está a cargo de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto al afiliado lego (CSJ SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).

En ese orden, la constatación de que se cumplió con el deber de información es ineludible, por lo que la simple firma del formulario de afiliación es insuficiente para acreditar el consentimiento informado del afiliado. Este es el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, en la sentencia SL19447-2017:

el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021),

Ahora, el hecho de que el afiliado hubiese suscrito el formulario de vinculación o que en el mismo se empleen leyendas o afirmaciones tales como que «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares que suelen consignarse en los formatos preimpresos, no liberan a las AFP de su obligación de cumplir de manera rigurosa y de buena fe su deber de información. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Se insiste, que las AFP cumplan el deber de información y su acreditación en el proceso no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, pues ellas son insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era Protección S.A. quien debía probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso.

Y, es que las AFP desde su creación, tienen el deber, de suministrar información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, como de ello da cuenta el artículo 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).

Deben informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la

medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Protección S.A. afirmó al contestar la demanda que a la actora se le brindó la asesoría requerida para el caso (archivo 10 Escrito de contestación Protección), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita, tenía la carga de acreditarlo, sin embargo, no aportó prueba que dé cuenta de la información realmente suministrada a la demandante en ese momento, adicional que, como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que el demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

3.5 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado *«bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida»* (CSJ SL1689-2017).

Por lo tanto, considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado del demandante del RPM al RAIS, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que Protección S.A. traslade a Colpensiones no solo los montos de la cuenta de ahorro individual y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima con los rendimientos financieros, sino también, las cuotas de administración y prima

de seguros previsionales, porcentajes destinados a gastos de administración, debidamente indexados, como ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga.

En consecuencia, se revocará parcialmente el numeral tercero de la sentencia objeto de alza para en su lugar ordenar CONDENAR a la AFP PROTECCIÓN a trasladar a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia (art. 16 Decreto 692 de 1994), trasladar a Colpensiones las cotizaciones del saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, los porcentajes destinados a cuotas y/o gastos de administración, los rendimientos que se hubieren causado, las primas de seguros previsionales, el fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados; hasta el último período efectivamente cotizado; así como la historia laboral del afiliado MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LOZANO, con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, *“...junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...”*.

3.6 PRESCRIPCIÓN

No se llama a prosperar la excepción de prescripción por cuanto la acción sobre el traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo que se debe predicar la imprescriptibilidad de la acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación y consulta se revocará parcialmente y confirmará.

Costas de segunda instancia a cargo de Protección S.A. y en favor de la demandante, por resultar vencida en el recurso, las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000; sin costas en esta instancia a cargo de Colpensiones dada la prosperidad parcial del recurso.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral **tercero** de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el 23 de enero de 2023 dentro del proceso promovido por MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LOZANO contra PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, como se dejó expresado en la parte considerativa de esta providencia. Y en su lugar se ordena:

TERCERO: CONDENAR a la AFP **Protección S.A.** a trasladar a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia (art. 16 Decreto 692 de 1994), trasladar a Colpensiones las cotizaciones del saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, los porcentajes destinados a cuotas y/o gastos de administración, los rendimientos que se hubieren causado, las primas de seguros previsionales, el fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados; hasta el último período efectivamente cotizado; así como la historia laboral del afiliado MIGUEL

ÁNGEL RODRÍGUEZ LOZANO, con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen* ...”.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

TERCERO: Sin Costas de segunda instancia por prosperar parcialmente el recurso de apelación.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ